

Los límites de los márgenes

*Organizaciones políticas locales y las Jornadas de Octubre de 2003
en El Alto, Bolivia*

Juan Manuel Arbona

Las Jornadas de Octubre de 2003, protagonizadas por distintas organizaciones barriales, vislumbraron las capacidades del poder local de crear espacios políticos que pudieran retar la lógica del proyecto neoliberal. Estos grupos rebasaron a las entidades políticas locales y rompieron el margen de legitimidad del Estado. Dichas movilizaciones pusieron en juicio las posturas objetivas del mercado y la hegemonía de clase. Sin embargo, a casi un año de estos eventos, ¿habrán cambiado las formas de hacer política?

Si el pueblo dirige, los líderes les seguirán
Mutabaruka

Las movilizaciones que sacudieron a Bolivia en octubre de 2003 han forzado la reformulación del discurso de las políticas de Estado, pero los espacios políticos que reproducen el proyecto neoliberal persisten. Esta paradoja apunta simultáneamente a la ampli-

tud, profundidad y flexibilidad del proyecto, y a los límites y márgenes de los movimientos sociales que luchan por establecer nuevos parámetros sobre las formas de hacer política. La implementación del proyecto neoliberal –bajo la tutela del entonces ministro Gonzalo

Juan Manuel Arbona: docente en el Bryn Mawr College, Pennsylvania, EEUU.

Palabras clave: entidades políticas locales, neoliberalismo, participación, legitimidad, democracia, Bolivia.

Sánchez de Lozada— no solo concentró las reformas en el ambiente económico, sino que intentó reconstruir los espacios políticos sobre los cuales se negocian cambios en las estructuras sociales y económicas. El propósito de esta estrategia era condicionar procesos políticos y sociales a los flujos y requisitos del capital, solidificando una hegemonía de clase (económica y política) proyectada desde el Estado como una situación natural y objetiva.

Las Jornadas de Octubre de 2003, protagonizadas por organizaciones barriales (comités de huelga) vislumbraron las capacidades del poder local de crear espacios políticos que rebasaron a las entidades políticas locales (EPL)¹ y rompieron el margen de legitimidad del Estado². En este sentido, las Jornadas de Octubre pusieron en tela de juicio las posturas naturalizadas del mercado y (por momentos) lograron desmascarar la hegemonía de clase.

Durante este periodo, la ciudad de El Alto fue el epicentro social de la revuelta que se desbordó por las calles y laderas hasta llegar a La Paz. Aunque los medios noticiosos enfatizaban el papel que jugaban la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Central Obrera Regional de El Alto (COR), el protagonismo fue asumido por los comités de huelga (Mamani). Estos comités tenían como base las estructuras barriales (articulando identidades étnicas y de clase), aunque no necesariamente respondían a la cadena de mando de

las EPL matrices, lo que les permitió mantener cierta autonomía barrial.

Como es ya conocido, el conflicto finalizó con la huida de Sánchez de Lozada, el juramento de Carlos Mesa como presidente, y varias promesas (referéndum vinculante sobre el gas, nueva ley de hidrocarburos y Asamblea Constituyente), que no necesariamente apuntaban a un cambio del proyecto neoliberal. De esta manera, la victoria de octubre abrió importantes posibilidades de democratización, pero también ha desnudado las limitaciones de las EPL. En vez de tomar un papel protagónico y promover nuevas formas de hacer política con una fuerte base local, los comités de huelga desaparecieron, cediendo su espacio político a la COR y a la Fejuve. Esto se evidenció durante las últimas movilizaciones de enero y marzo de 2005 en las que la Federación ha asumido un liderazgo político en El Alto, aunque reconociendo la fragilidad de esta posición.

Las primeras reflexiones que surgieron a raíz de las Jornadas describían estas movilizaciones como una señal de desgaste del proyecto neoliberal y la creación de espacios políticos donde se

1. Por entidades políticas locales se entiende aquellas organizaciones populares de base territorial, que son reconocidas por los distintos niveles del Estado como interlocutores o como intermediadores de las demandas de las bases.

2. Por margen de legitimidad del Estado entendemos el grado de aceptación tácita no solo del Estado y sus instituciones como estructura política representativa, sino también la aceptación de las políticas que provienen de estas instituciones.

podría practicar una democracia directa (Gómez; Tapia 2002). Por otro lado, una línea más conservadora argumenta que estas movilizaciones simplemente buscan «rescatar el pasado» donde no se presentan propuestas, manteniendo al país en una «extenuante indefinición política» (Laserna, p. 5). Tomado esto en cuenta, el propósito de este ensayo es presentar una visión crítica de las EPL (particularmente la COR y la Fejuve), con la intención de reconocer y analizar los límites y márgenes de los protagonistas de estas acciones como punto de reflexión, para fomentar una discusión acerca del grado de democratización interna y constante aprendizaje de las organizaciones populares.

Con esto en mente, se plantea que las estructuras políticas en El Alto tienden a reproducir las relaciones de poder típicas de los partidos tradicionales, en las cuales los grupos dominantes, como los líderes y dirigentes de las EPL, se han beneficiado de relaciones de «reciprocidad asimétrica», que les permiten mantener un monopolio sobre la representación política de la población de base. Esto sugiere una razón de la persistencia del proyecto neoliberal a pesar del rechazo popular hacia esta propuesta³.

La construcción/destrucción de los espacios políticos

La implementación del programa de reestructuración en 1985 ha permitido

a la clase dominante imponer un esquema ideológico en la política económica nacional. Esto ha resultado en la reducción del escaso margen de legitimidad que tenía el Estado para orientar la economía y negociar las demandas sociales a través del uso del excedente económico generado por la explotación de los recursos naturales (Tapia 2001). Las tensiones magnificadas por las políticas económicas del Estado en su versión neoliberal generaron lo que Gramsci llamó la «crisis de la hegemonía», que ocurre cuando la clase dirigente fracasa en un proyecto político para el cual ha pedido, o extraído por la fuerza, el consentimiento del pueblo o debido a que el pueblo pasó de un momento de pasividad política a un cierto nivel de actividad (p. 210).

Esta transformación a raíz del fracaso del proyecto político manifiesta el papel central que juega el mantener un margen de legitimidad. Durante los primeros años del proyecto neoliberal el Estado logró una estabilidad política relativa que ha facilitado ese precario margen de legitimidad. Esto lo realizó gracias a estrategias que incorporan la cooptación de la oposición, maniobras legales y represión (Arbona 2004).

3. Con esto no se quiere insinuar que la responsabilidad del triunfo o la derrota del proyecto neoliberal recaer exclusivamente sobre las EPL. Este es solo un factor dentro de un complejo proceso de negociación que implica una amplia gama de actores y procesos locales, nacionales e internacionales.

Acentuando la importancia del margen de legitimidad del Estado, García Linera (2003) hace hincapié en la en-deble relación Estado/sociedad y la ruptura durante las Jornadas de Octubre de 2003:

Por lo general la dominación se asienta en la aceptación de un margen de autoritarismo e imposición que el dominado es capaz de aceptar por parte de las autoridades. Es el margen de legitimidad que tiene el Estado para mantener el monopolio de la coerción. Sin embargo, hay un momento en que este margen de tolerancia se quiebra, en que la plebe ya no está dispuesta a jugar una economía de mansedumbres negociadas, es el momento de la disolución del orden estatal y del contrapoder. Y ese margen de docilidad moral ha sido roto precisamente por la muerte.

Antes de 1985, este papel de interlocutor entre el «monopolio de la coerción» del Estado y la «docilidad moral» del pueblo era organizado por sindicatos —específicamente la Central Obrera Boliviana (COB), que articulaba a la mayoría de la clase trabajadora— y los partidos que representaban los intereses de las elites (García Linera 2002).

Con la implementación del DS 21060, que promovió una lógica centrada en el papel del mercado como principal agente de distribución de recursos, el poder de la COB se comenzó a fragmentar⁴. Esta fragmentación, que también converge con el fin de décadas de regímenes militares, generó un ambiente fértil para organizar un nuevo protagonismo de los partidos, lo que facilitó la creación de espacios políticos y opacó el horizonte de las luchas sociales.

Estos compromisos se cumplen a través de pactos firmados por una estructura de relaciones de «reciprocidad asimétrica», a través de las cuales la clase política otorga favores mínimos⁵ a diferentes EPL y líderes locales a cambio de apoyo tácito, ya sea en forma de votos o de no cuestionar/retar el poder de éstos. Gramsci se refiere a ello como la «educación del consentimiento», que permite la conformación de espacios políticos (en la forma de partidos) para competir por el control del Estado, ya que a través de esos espacios éste exhibe su hegemonía y construye un marco jurídico y social para educar a la sociedad. La implementación de la Ley de Participación Popular (LPP) permitió a los partidos, temporalmente, articular la conformación de EPL y a su vez asegurar que la creación de espacios políticos canalizara las corrientes insurgentes de tal forma que no desestabilizaba la hegemonía del Estado⁶. En este sentido, las EPL «son una forma de estabilización de la acción colectiva, son una forma de participación e integración desde lo corporativo, grupal y sectorial» (Tapia 2002, p. 34).

4. Esta fragmentación fue articulada por la caída de los precios del estaño y la clausura de las principales minas.

5. Estos favores incluyen cosas tan simples como bolsas de arroz o fideo hasta obras de infraestructura en vecindarios o acceso a fuentes de trabajo.

6. Cabe resaltar que existen importantes diferencias ideológicas y funcionales entre partidos en Bolivia. Pero los espacios políticos institucionales en que estos operan han tendido a socavar los proyectos políticos y/o ideales que informaron la conformación del partido.

Las EPL tienen un rol articulador de las demandas de las bases hacia el Estado, asumiendo una función mediadora, concomitante a la que supuestamente cumplen los partidos políticos. Sus líderes y dirigentes requieren mantener cierto margen de legitimidad frente a las bases, y este margen también se mantiene sobre la base de relaciones de reciprocidad asimétrica. Esta jerarquía Estado/partidos/EPL/bases ofrece oportunidades a los grupos que pueden controlar a las EPL desde la dirigencia para mantener su posición.

Estructura y dinámicas políticas en El Alto

El Alto es prácticamente un emblema de la exclusión racial y económica en Bolivia: la primacía de población de ascendencia indígena (que de por sí es un motivo de exclusión), el autoempleo y las formas familiares de trabajo son predominantes. Con más de 650.000 habitantes, la ciudad de El Alto concentra identidades de clase y etnia que informan los modos en que se ve y hace política, cómo se lucha, y cómo se ve el futuro (Arbona 2003).

El Alto ha sido vista como una ciudad «en emergencia», a punto de estallar, pero hasta 2002 no había representado mayores retos organizados al sistema político, aunque sí un constante oleaje de marchas y bloqueos. Analistas e intelectuales se preguntaban por qué El Alto no estallaba. ¿Por qué mantenía una posición relativamente pasiva? ¿Era pasiva? Las respuestas apun-

taban a la relación dialéctica entre cómo se construye (y lucha por) una visión del futuro y la vivencia cotidiana. «Las personas pelean cuando creen que hay porvenir por el cual vale la pena apostar y arriesgarse; cuando no hay eso surge un tipo de gente de mentalidad cultural endeble, amorfa, gelatinosa» (Foro Urbano de El Alto, p. 4).

Pero la noción política del porvenir en El Alto no necesariamente está construida de manera individual, sino que es negociada colectivamente a través de una red que incluye partidos políticos, EPL y grupos autónomos barriales. En este sentido, la legitimidad que las bases conceden a estos actores con el propósito de mejorar su porvenir, ha representado una relación de reciprocidad asimétrica, en la que los dirigentes trabajan para las bases, pero a cambio, para su porvenir político (y, en algunos casos, económico). Esto ocurre dentro de un marco estructural de alta inequidad social en un país parcialmente integrado en el sistema capitalista global.

Movilizaciones sociales: límites y márgenes

René Zavaleta, retomando a Marx, indica que «la crisis [es] como un instante anómalo en la vida de una sociedad, y eso querría decir una hora en la que las cosas no se presentan como son en lo cotidiano y se presentan en cambio como son en verdad» (p. 21). Si bien las movilizaciones sociales sirven como método para analizar la confor-

mación y destrucción de espacios políticos en tiempo y espacio, también es importante reconocer y discutir sus límites y márgenes. En esta sección se analizará cómo relativamente nuevas organizaciones barriales surgieron durante los momentos críticos de las Jornadas de Octubre de 2003, cómo rebasaron a la estructura política, y cómo después de lograr su objetivo principal –la renuncia de Sánchez de Lozada– prácticamente han desaparecido, cediendo poder político a las «antiguas» estructuras.

Las Jornadas de Octubre de 2003. Representan un momento en el que se cristalizó un horizonte político, donde se vislumbró la promesa de un cambio del sistema político a partir de las vivencias de los alteños (Gómez). Este protagonismo rebasó las fronteras de los espacios políticos trazados por una negociación entre partidos (en la esfera oficialista) y EPL. En este sentido, el protagonismo de los comités de huelga cristaliza el momento en el que el margen de legitimidad del Estado se quiebra y por tanto, se cuestiona la objetividad y naturalidad de las hegemónicas de clase, pero también se quiebra el margen de legitimidad de la dirigencia de las EPL.

Las muertes (más de 70), que comenzaron en la comunidad de Warisata y se extendieron a El Alto, sirvieron como el detonante que desató la ruptura del margen de legitimidad y lanzó al pueblo a las calles (García Linera 2003).

Desde la segunda semana de septiembre de 2003, una serie de conflictos, que comenzó con movilizaciones para frenar un intento de reforma de los impuestos municipales, sacudieron al país (*La Prensa* 2003a; 2003b; *La Razón* 2003a). Con el paso de los días, surgieron más conflictos con demandas sectoriales, pero paulatinamente convergieron en el rechazo al plan de exportación del gas y demandas de renuncia del presidente. Uno de los conflictos con más resonancia fue el bloqueo en la zona de Achacachi, que dejó incomunicadas a varias poblaciones, entre ellas, la de Sorata, donde una centena de turistas estaban atrapados. Bajo la supervisión personal de Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Gobierno, se organizó un operativo militar para «rescatar» a los turistas. A medio camino, en la localidad de Warisata, los campesinos enfrentaron con piedras y palos el «convoy de rescate humanitario»; los militares respondieron con balas de guerra, dejando 3 muertos incluyendo a una niña de 8 años (*EcoNoticias Bolivia* 2003a).

Durante estos días se manejaban varios procesos y discursos. Por un lado, el Estado exhortaba a los líderes al diálogo, mientras mantenía sus acciones bélicas. Por el otro, los líderes de las EPL presentaban discursos radicales, mientras entablaban negociaciones secretas con el Estado. Estas acciones reflejan la estrategia de los grupos de poder (representantes del Gobierno y dirigencia de las EPL), de mantener una brecha entre las instancias donde

se construye la opinión pública y los espacios políticos de negociación. En este contexto de ruptura social y furia colectiva dirigida hacia el Estado, logran acaparar los espacios políticos «designados» por éste para el diálogo, y buscan canalizar a esta multitud creciente en torno de las demandas aglutinadoras, como la cancelación del proyecto de exportación de gas natural. Cuando los vecinos de la zona de Senkata decidieron cortar el paso a las cisternas que abastecían de combustible a las gasolineras de La Paz, el Gobierno militarizó El Alto.

En el ámbito barrial, se forjaban lazos locales y se daba vida a los comités de huelga, a través de los cuales se organizaba la protección de vecindarios y las estrategias de movilización. Los barrios se ordenaban por cuadradas estableciendo jerarquías internas, cadenas de mando y responsabilidades, integrando formas de gobernabilidad indígena y estrategias de organización sindical (Mamani). Fue en este proceso de organización barrial autónoma, pero coordinada, que las EPL comenzaron a ser rebasadas. Por ejemplo, en Villa Ingenio, barrio ubicado en la periferia de El Alto, los residentes se organizaron para resistir a las fuerzas militares. Durante las noches se quemaron llantas en vigiliadas y se establecieron comités de vigilancia por si los soldados intentaban controlar la zona. En las primeras horas de la mañana se convocaba a plenarios para definir acciones de resistencia. Los días en que los militares disparaban indis-

criminadamente, las voces más contundentes eran de vecinos que llamaban a las radios locales y presentaban discursos espontáneos en sus vecindarios. Fueron los vecinos quienes organizaron las masivas marchas que bajaron a La Paz. En estas marchas que se hacían en protesta por las muertes y las políticas de exportación de gas, comenzaban a surgir nuevas demandas: nacionalización del gas y renuncia presidencial. De esta forma, los comités de huelga «funcionaron como espacios de producción de igualdad política real y de formación de opinión pública» (García Linera 2001, p. 71).

Por su parte, los líderes y dirigentes de las EPL perdían poder de convocatoria a medida que el conflicto crecía, como ocurrió por ejemplo, en una marcha que pasaba por la Avenida 6 de Marzo con los líderes de la Fejuve a la cabeza. Cuando la marcha se encontró frente a una columna de militares y dos tanquetas, éstos desaparecieron (*Prensa Alteña* 2003a). La marcha continuó y los efectivos militares no tuvieron otra opción que darles paso. Comentarios sobre el suceso resaltaban el patrón de los líderes que aparecían en los momentos específicos para ser vistos por los medios noticiosos y mantener su margen de legitimidad, pero que desaparecían cuando «había que dar la cara».

Estos breves ejemplos sugieren varios eventos que no han sido debidamente analizados a partir de las Jornadas de

Octubre, e indican cómo las EPL y sus líderes perdieron el margen de legitimidad hacia las bases y el Estado. Un dirigente de la COB reconoció que «las bases tienen sed de justicia y, en el próximo conflicto, van a pasar por encima de las direcciones que no se pongan a su altura» (*EcoNoticias Bolivia* 2003b). Octubre en El Alto representó no solo el desmoronamiento de la legitimidad del Estado, sino también de la dirigencia de la COR y de la Fejuve.

Pos-octubre de 2003

Uno de los efectos de las Jornadas de Octubre fue la transformación del discurso del Estado, particularmente el de los partidos políticos. El 19 de octubre, días después que Mesa asumió la Presidencia, éste fue a El Alto. Frente a miles de alteños y alteñas, prometió que el Gobierno emprendería varias consultas nacionales sobre el tema del gas y el de la reforma constitucional. En el evento reconoció que «la ciudad de El Alto es la garantía de la unidad y de la defensa de los intereses de Bolivia. El Alto no divide, El Alto une» (*La Razón* 2003b).

Estas palabras son simultáneamente un reconocimiento del poder y la capacidad de organizaciones barriales y del desgaste del sistema político en el que se «sepultó a la forma pactada de la democracia, en su concepción oligopólica de acuerdos interpartidarios, pero, fundamentalmente, ha arrastrado a la forma semiparlamentaria de régimen» (Verdesoto, p. 42).

Mientras estas expresiones apuntan a un cambio, o a la promesa de un cambio, la situación pos-octubre no ha logrado llenar las expectativas locales. Esto ha sido evidente por la continuidad de las movilizaciones realizadas durante los dos últimos años en el reclamo por las promesas de octubre, además de nuevas reivindicaciones como fue la del agua efectuada en enero de 2005. A través de la conformación de movilizaciones contundentes, los líderes han utilizado ese capital social ganado por las luchas para crear espacios dentro de los partidos. Esto apunta a la paradoja de cómo una estrategia para legitimizar el movimiento también resulta en la cooptación y fragmentación del poder social ganado por las movilizaciones. En este sentido la interacción entre líderes de EPL y de partidos políticos establece los límites y traza los márgenes de las posibilidades para cambios profundos.

Un ejemplo de cómo la situación política revirtió a las «antiguas» formas de relacionamiento clientelar entre partidos y EPL es el caso de la Fejuve. En los meses siguientes a las Jornadas de Octubre la Fejuve asumió un papel de liderazgo frente al cual los partidos no podían competir. La estrategia de los partidos fue apostar por el porvenir individual de los líderes y dirigentes de las EPL. Por tanto estaban reproduciendo la relación clientelar de reciprocidad asimétrica que definía las formas de hacer política. Estos líderes recibieron ofertas de trabajo en diferentes

entidades políticas que controlaban estos espacios. Aunque el principal dirigente en ese momento, Mauricio Cori, no se benefició directamente, recibió un porcentaje del sueldo de las personas empleadas (*Prensa Alteña* 2003b). La Prefectura de La Paz y la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) fueron algunas de las entidades que recibieron a dirigentes de la Fejuve (*Prensa Alteña* 2004).

Hasta la reforma constitucional de febrero de 2004 (aprobada, justamente como consecuencia de las Jornadas de Octubre) el acceso a los cargos electivos de la administración pública fue competencia exclusiva de los partidos. En ese contexto, se han dado innumerables casos en los que la población, a través de las EPL, supuestamente ha instrumentalizado su relación con los partidos, promocionando a dirigentes o ex-dirigentes de organizaciones de base como candidatas. Esta experiencia indica que no pocas veces han sido los partidos los que han instrumentalizado su relación con las organizaciones en beneficio propio. Lo que se logró fue la fragmentación de las alianzas y esperanzas forjadas por las luchas de octubre. Para las elecciones municipales muchos de los líderes de las EPL se afiliaron con partidos o crearon los suyos. El resultado final fue la reelección de José Luis Paredes, afiliado al Movimiento Revolucionario de Izquierda (partido tradicional) antes de conformar su propio partido, Plan Progreso. Esta victoria fue, en parte, el

producto de la fragmentación política y la búsqueda por los dirigentes de protagonismo. Estos deseaban capitalizar las Jornadas de Octubre a través de la creación de su propio partido⁷.

Conclusiones

En octubre de 2003 los alteños nos permitieron ver lo que podría ser el comienzo de una forma distinta de conformar espacios políticos y de hacer política, que consecuentemente podría tener un efecto sobre la distribución del excedente y la construcción del porvenir. La importancia de esos momentos y ese espacio está en el cómo se demarcaron pautas para organizar un cambio profundo bajo un esquema de democracia radical y directa. A pesar de esto, en los meses que prosiguieron a las Jornadas de Octubre se ha visto un retorno a la conformación de espacios políticos que privilegian los intereses de las clases hegemónicas. No obstante, podemos rescatar algunas razones para mantener cierto optimismo. El caso de la ciudad de El Alto indica cómo los actores que sostienen espacios políticos y reproducen la hegemonía de clase están buscando la manera de reconstruir su margen de legitimidad. Las Jornadas de Octubre desenmascararon a muchos de los dirigentes de las EPL, aunque es prematuro indicar cuál será el resultado final. Mientras el mar-

7. De acuerdo con la Corte Nacional de Elecciones, 21 partidos participaron en las elecciones municipales de El Alto en 2004.

gen de legitimidad de los dirigentes y líderes políticos locales refleje las mismas estructuras y procesos basados en una reciprocidad asimétrica, los movimientos sociales enfrentarán serias limitaciones.

Las recientes movilizaciones durante los primeros meses de 2005 sugieren cambios y continuidades. Por un lado, el papel de las EPL –particularmente el de la Fejuve, bajo la dirección de Abel Mamani– refleja un primer paso hacia la democratización interna de estas entidades. Por otro lado, los intentos de renuncia del presidente Mesa y las maniobras políticas en el Congreso reflejan nuevos propósitos de absorber y neutralizar los movimientos sociales.

Bibliografía

- Arbona, J.M.: *Ver y hacer política en la ciudad de El Alto: capacidades políticas y actividades económicas*, Documentos de trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de Desarrollo Humano, La Paz, Bolivia, 2003.
- Arbona, J.M.: *Managing Policy Failures: Neo-Liberal Tensions, Ruptures, and Stabilizations in El Alto*, Bolivia, 2004.
- Foro Urbano de El Alto: *Nuevas formas de hacer política y de gobernar*, El Alto, 2001.
- García Linera, A.: «Sindicato, multitud y comunidad: movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia» en R. Gutiérrez, A. García, R. Prada, F. Quispe y L. Tapia (eds.): *Tiempos de rebelión*, Muela del Diablo, La Paz, 2001, pp. 9-79.
- García Linera, A.: «El ocaso de un ciclo estatal» en R. Gutiérrez, A. García, R. Prada y L. Tapia (eds.): *Democratizaciones plebeyas*, Muela del Diablo, La Paz, 2002, pp. 41-72.
- García Linera, A.: «El Alto insurrecto» en *Juguete Rabioso*, octubre de 2003.
- García Linera, A.: «La incertidumbre étnico-geográfica del poder» en *Pulso*, 13 de febrero de 2004.
- Gómez, L.: *El Alto de pie: una insurrección aymara en Bolivia*, Comuna, La Paz, 2004.
- Gramsci, A.: *Selection from the Prison Notebooks*, International Publishers, Nueva York, 1971.
- Laserna, R.: «Bolivia: entre populismo y democracia» en *Nueva Sociedad* N° 188, 11-12/2003, pp. 4-14.
- Mamani, P.: *El rugir de las multitudes: La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/ Qullasuyu*, Edic. Yachaywasi, 2004.
- Tapia, L.: «El movimiento de la parte maldita» en R. Gutiérrez, A. García, R. Prada, F. Quispe y L. Tapia (eds.): *Tiempos de rebelión*, Muela del Diablo, La Paz, 2001, pp. 215-242.
- Tapia, L.: «Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política» en R. Gutiérrez, A. García, R. Prada y L. Tapia (eds.): *Democratizaciones plebeyas*, Muela del Diablo, La Paz, 2002, pp. 25-72.
- Verdesoto, L.: «¿Hacia dónde va Bolivia?» en *Nueva Sociedad* N° 191, 5-6/2004, pp. 38-49.
- Zavaleta, R.: *Lo nacional-popular en Bolivia*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1986.

Informes de prensa

- EcoNoticias Bolivia*: «Masacre en el Altiplano», 20/9/03a.
- EcoNoticias Bolivia*: «La COB hace una pausa en la ofensiva antineoliberal», 19/10/03b.
- La Prensa*: «Colonizadores aíslan Caranavi», 11/9/03a.
- La Prensa*: «Primera escaramuza por el gas», 16/09/03b.
- La Razón*: «Los vecinos de El Alto cercaron a La Paz por dos formularios», 16/9/03a.
- La Razón*: «Mesa promete justicia contra los responsables de las muertes», 20/10/03b.
- Prensa Altea*: «La COR se perdió en peleas internas de sus dirigentes», noviembre de 2003a, vol. 2 N° 14.
- Prensa Altea*: «Fejuve tambalea por cuoteo de dirigentes», diciembre de 2003b, vol. 2 N° 16.
- Prensa Altea*: «Cae a pedazos las cuotas que habría obtenido Mauricio Cori», noviembre de 2004, vol. 3 N° 20.